



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

29205/2019 “MADERO VIEJO SA c/ EN-AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”

Buenos Aires, de julio de 2022

VISTOS 12/5/2022 Y CONSIDERANDO:

1º) Que, a fs. 323, la Sra. Juez de la instancia previa **desestimó** la excepción de habilitación de instancia articulada por la demandada, e impuso las costas por su orden, en atención a las particularidades del caso.

Para así resolver, ponderó que la resolución en cuestión revestía el carácter de definitiva en sede administrativa y sólo podía impugnarse por la vía prevista en el art. 23 de la ley 19.549. Consideró, asimismo, el Dictamen DAL 14/1993 de la Dirección de Asesoría Legal de la AFIP, que estableció que la presentación de una declaración jurada con un saldo de impuesto menor constituía una manifestación inequívoca de la voluntad de repetir la diferencia.

Agregó que la circunstancia de que la demandada no hubiera examinado la presentación de declaración jurada rectificativa como un reclamo administrativo previo de repetición, a fin de efectuar un tratamiento más profundo de la cuestión, no podía ir en desmedro del contribuyente mandándolo nuevamente a sede administrativa para el tratamiento de la procedencia o improcedencia de la repetición, en caso de que se admitiera la nulidad de la resolución impugnada en autos.

2º) Que contra dicha decisión **apeló el Fisco** y fundó su recurso a fs. 330/6, contestado a fs. 338/346.

Se agravió de la interpretación que llevó a cabo la magistrada de grado respecto del Dictamen DAL 14/1993. Sostuvo que la conducta de un contribuyente tendiente a rectificar en menos una declaración jurada debía considerarse una causal de interrupción en los términos del actual artículo 69 de la ley 11.683, a los efectos de un eventual reclamo de repetición, pero ello no invalidaba las facultades del Fisco para evaluar si ésta última era procedente, más allá de la razón —o no— de la declaración jurada rectificativa en menos.

Adujo, en tal sentido, que el análisis de la procedencia de un pedido de repetición implicaba llevar adelante una serie de controles relacionados con la situación fiscal del solicitante *además* de reconocer la presentación de la declaración jurada rectificativa.

En tal sentido, consideró que si se resolviese la devolución de las sumas reclamadas se estarían vulnerando gravemente facultades y poderes del Fisco.



Recordó, por otra parte, que el art. 92 de la ley 11.683 prevé el procedimiento a seguir para la ejecución de las obligaciones debidas al Fisco. Una vez concluido dicho juicio, de acuerdo a las prescripciones de los arts. 93 y 81, la parte interesada recién podrá iniciar acción de repetición en los términos allí descriptos.

El 7/6/2022 emitió dictamen el Sr. Fiscal General.

3º) Que, conforme surge de autos, el 31 de mayo de 2018, la Agencia N° 8 de la Dirección Regional Centro resolvió que no resultaba procedente la aprobación de la declaración jurada rectificativa presentada por la actora correspondiente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2016 (fs. 25).

Disconforme, la empresa Madero Viejo SA interpuso recurso de apelación en sede administrativa, que fue rechazado por la Directora de la Dirección Regional Centro mediante **resolución 46/19** (fs. 43/47 vta.), al considerar que el planteo efectuado requería un examen de los hechos y las pruebas que habían originado la declaración jurada rectificativa que excedía la solicitud, la cual había tramitado como una cuestión de puro derecho. Asimismo, agregó que, en materia de determinación tributaria, el principio era el de “estabilidad jurídica”, razón por la cual, en los casos de rectificación en menos, la regla general era que la acción de repetición constituía la vía adecuada para satisfacer los intereses particulares del contribuyente.

Posteriormente, la actora promovió demanda, a fin de que se revocara la resolución antedicha, *que luego amplió* solicitando la devolución de la suma de **\$284.044,25** abonada por tal concepto con motivo de la ejecución fiscal iniciada por la AFIP, en trámite por ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales y Tributarias N° 6, secretaría 22. Al efecto, aseveró que el pago había sido efectuado en forma coactiva, ya que no había mediado voluntad de su parte de cancelar el capital e intereses, puesto que resultaba, a su entender, manifiesto que se trataba de un pago indebido. Aseveró que había cometido un error involuntario en la carga del aplicativo, al arrastrar al 2016 el ajuste del valor proporcional de las acciones que constituían la cartera de inversiones propiedad de la Compañía que había sido practicado en el período fiscal 2015, motivo por el cual había presentado una declaración rectificativa en menos.

Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional requirió que se declarara la falta de habilitación de instancia respecto de la pretensión concerniente a la restitución de lo abonado con motivo de la ejecución fiscal, por carecer de intervención su mandante en lo referente a la fiscalización de la deuda en los términos expuestos por la actora.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
29205/2019 “MADERO VIEJO SA c/ EN-AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”

4º) Que, la habilitación de la instancia implica una decisión que involucra el denominado “acceso a justicia” y, en tanto constituye una máxima garantía que brinda el Estado de Derecho, es necesario que el obrar del Tribunal se efectúe con extrema prudencia en cuanto a la admisibilidad del reclamo impetrado; con previa revisión de los requisitos legalmente exigidos pero sin caer en exigencias ritualistas y formalismos inútiles (cfr. Sala II, causa n° 48.398/2018 “Shell Cía Argentina de Petróleo SA c/EN- AFIP DGI s/ DGI”, fallo del 27 de agosto de 2020, entre otros).

5º) Que, como se indicó anteriormente, el 6 de junio de 2019, la actora **promovió demanda** a fin de que se revocara la Res. 46/2019 en cuanto rechazó su declaración jurada rectificativa del período 2016 correspondiente al Impuesto a las Ganancias.

El 4 de diciembre de dicho año amplió su objeto en los términos del art. 331 del CPCCN, solicitando no sólo que se revocara el referido acto administrativo, sino que **se ordenara la devolución de la suma de \$284.044,25 abonada por tal concepto más intereses resarcitorios y punitivos pagados con motivo de la ejecución fiscal tramitada ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 6 caratulada “AFIP c/Madero Viejo SA s/ejecución fiscal” (expte. 31.340/19).**

6º) Que, la ampliación fue efectuada en la etapa procesal oportuna, es decir antes de que se notificara la demanda al Fisco (20/10/21), con lo cual no había quedado trabada la *litis*, que es el momento en que se fija el objeto del proceso.

7º) Que, por lo demás, tal como lo señala el Sr. Fiscal General, dado que el reintegro requerido en forma accesorio a la pretensión de nulidad del acto, (por el cual se rechazó la aprobación de la declaración jurada) se encuentra subordinado a la procedencia de la rectificación, y que la habilitación de la instancia a su respecto no se halla en tela de juicio, exigir a la actora el agotamiento de la vía administrativa comporta un ritualismo inútil.

En efecto, no puede desconocerse en tal sentido que acoger la pretensión del Fisco implicaría dilatar una decisión sobre el caso que requiere de un pronunciamiento sobre dos cuestiones inescindibles, ya que de admitirse la rectificativa correspondería devolver lo pagado de más.

Es decir que la admisibilidad o no de la impugnación determina la suerte de la repetición, de modo que la promoción de la vía administrativa implicaría, en las particulares circunstancias del caso, no sólo un ritualismo formal, sino una duplicación de controversias, con la consiguiente demora y dispendio de actividad administrativa y jurisdiccional innecesarios.



En consecuencia y de conformidad con el dictamen, corresponde estar al principio “*pro actione*” (Fallos: 324: 1087 y 324:2672, entre otros) y confirmar la resolución en cuanto rechazó el planteo de falta de habilitación de la instancia opuesta por la demandada.

8º) Que, a lo expuesto cabe agregar que las sumas cuya repetición se persigue *fueron ingresadas a la AFIP como consecuencia de la ejecución que ese organismo inició para su cobro*. De manera que, **tratándose de un pago a requerimiento**, ya que no medió voluntad de la actora para cancelar el capital e intereses, *no necesita efectuar un reclamo administrativo*, de conformidad con lo previsto en el art. 81 de la ley 11.683 (esta Sala en la causa n° 51382/2016 “Cantisani Pablo Eduardo c/EN –AFIP- DGI s/ DGI” del 9/11/17; Sala V en la causa n° 8641/2015 “Castro, Marcelo Alejandro c/EN –AFIP” del 14/9/2017 y Sala II causa n° 48.398/2018 “Shell Cía Argentina de Petróleo SA c/ EN –AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva” antes citada, entre otros.).

Por ello **SE RESUELVE**: rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada. Con costas por su orden en atención a la naturaleza compleja de la cuestión (art. 68, segunda parte, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

